



**NOTIFICACIÓN POR AVISO**  
**Art. 69 Ley 1437 de 2011**

Lugar y fecha: 23 de abril de 2021

Acto a notificar: Oficio No.17761 del 22 de abril de 2021 - Respuesta a Denuncia anónima Radicado 4967 y 5509 del 16 de diciembre del 2020.

Persona a notificar: **ANÓNIMO.**

Autoridad que expide el acto administrativo: **DIRECCIÓN DE CONTROL FÍSICO.**

**ANTECEDENTE:**

El día 22 de abril de 2021 a través del Oficio No.17761, la Dirección de Control Físico profirió Respuesta a la denuncia anónima radicada 4967 y 5509 del 16 de diciembre de 2020.

Teniendo en cuenta que la petición fue presentada de manera anónima se hace necesario dar aplicación a las disposiciones del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, en tal sentido la Dirección de Control Físico procede a:

**NOTIFICAR POR AVISO**

A **ANÓNIMO**, sobre el contenido del Oficio No.17761 del 22 de abril de 2021 - Respuesta a denuncia anónima radicado 4967 y 5509 del 16 de diciembre del 2020.

Conforme al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, se adjunta al presente aviso copia íntegra del Oficio No.1761 del 17 de marzo de 2021, y se procede a su publicación en la página web de la Alcaldía Municipal de Pereira y en la entidad territorial ubicada en la carrera 7 N° 18-55 Palacio Municipal PISO 1 Pereira- Risaralda, lugar de acceso el público, por el término de cinco (5) días.

Contra el oficio que se notifica no procede recurso alguno.

El presente aviso se fija el día 23 de abril de 2021 a las 7:00 a.m.

Se desfija el 23 de abril de 2021 a las 4:00 p.m.

**Nota:** Se hace la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. (Art. 69 Ley 1437 de 2011)

**WILFOR LOPEZ TORO**  
Director Operativo de  
Control Físico

Pereira, 22 de abril de 2021

Señor

**ANONIMO**

N/A

N/A

Pereira, Risaralda.

No. 17761



Asunto: RESPONDIENDO DENUNCIA ANONIMA SEGUN SAIA 4967 Y 5509 RECIBIDA A TRAVES DE LA PLATAFORMA A LUCCHAR POR PEREIRA [denuncias@pereira.gov.co](mailto:denuncias@pereira.gov.co)

Cordial saludo,

La Dirección Operativa de Control Físico, en uso de sus facultades legales de inspección, vigilancia y control sobre el cumplimiento de las normas urbanísticas y protección sobre el Espacio Público, se permite efectuar algunas manifestaciones con relación a las denuncias radicadas bajo el No. 4967 y 5509, recibidas vía electrónico a través de la plataforma a Luchar por Pereira, en los siguientes términos:

#### ANTECEDENTES

Según denuncias radicada en el aplicativo A LUCCHAR POR PEREIRA, se pone de presente una invasión en predio que antes estaba destinado a una cancha de tejo, el cual está ubicado en el Barrio Samaria 2 Comuna el Poblado.

Con el fin de constatar los hechos denunciados, se designó a la contratista Sandra Liliana Correa Correa, profesional adscrita al equipo de trabajo de la Dirección de Control Físico, quien manifiesta que el pasado 17 de diciembre de 2020 realizó visita al predio indicado, encontrando según acta de visita, que: Donde se evidenció taller de metalistería construido con estructura en guadua, mampostería mixta (zinc, Guadua, Superboard) y cubierta de lámina de zinc. **Dicha estructura cuenta con un área aproximada de 100 metros cuadrados.** Según información suministrada por vecinos del sector, la construcción lleva varios años en el lugar, al momento de la visita no se evidencia maquinaria ni procesos constructivos.

## CONSIDERACIONES

En sentencia C-265 de fecha abril 5 de 2017, M.P. (e) IVÁN HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO, se revisó la importancia atribuida al espacio público por estar íntimamente ligado con la calidad de vida de los ciudadanos, indicando en dicha providencia que: *El Constituyente de 1991 consideró necesario brindar al espacio público una protección expresa de rango constitucional. Esta decisión resulta claramente compatible con los principios que orientan la Carta Política y con el señalamiento del tipo de Estado en el que aspiran vivir los colombianos. Sin duda, una de las manifestaciones del principio constitucional que identifica a Colombia como un Estado social de derecho guarda relación con la garantía de una serie de derechos sociales y colectivos como la recreación (artículo 52 C.P.), el aprovechamiento del tiempo libre (ibíd.), y el goce de un medio ambiente sano (artículo 79 C.P.) que dependen de la existencia de un espacio físico a disposición de todos los habitantes.*

*De otra parte, la calidad de vida de las personas que habitan un determinado lugar está íntimamente ligada a la posibilidad de contar con espacios de encuentro y circulación que hagan posible la construcción de un tejido social en el que cada individuo se reconoce como miembro de una comunidad y se relaciona con otros para la satisfacción de sus intereses y necesidades. De esta manera, la defensa del espacio público contribuye a garantizar la existencia de un escenario de convivencia libre que acerca a todos los habitantes de una ciudad en condiciones de igualdad.*

*En tercer lugar, algunas de las formas en las que se materializa la democracia participativa que sustenta la estructura del Estado colombiano van de la mano de la existencia de espacios abiertos de discusión en los que las personas puedan reunirse y expresarse libremente. El espacio público es, entonces, el ágora más accesible en la que se encuentran y manifiestan los ciudadanos.*

Según el artículo 82 superior el Estado tiene el deber de velar por la protección de la integridad del espacio público, es decir, se trata de una carga impuesta por el Constituyente en favor de la integridad de estas áreas para evitar que sufran menoscabo en los aspectos físico, social, cultural, urbanístico e incluso jurídico, para que la comunidad pueda usarlos y disfrutar de ellos dentro de las previsiones legales establecidas. Sobre esta materia la Corte ha señalado: *La consagración de este deber constitucional es reflejo de la importancia otorgada por el Constituyente a la preservación de espacios urbanos abiertos al uso de la colectividad, que satisfagan las diversas necesidades comunes derivadas de la vida en las ciudades y poblados y contribuyan, igualmente, a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, permitiendo la confluencia de los diversos miembros de la sociedad en un lugar común de*

*interacción. Por su destinación al uso y disfrute de todos los ciudadanos, los bienes que conforman el espacio público son inalienables, imprescriptibles e inembargables (art. 63, C.P.); esta es la razón por la cual, en principio, nadie puede apropiarse del espacio público para hacer uso de él con exclusión de las demás personas, y es deber de las autoridades desalojar a quienes así procedan, para restituir tal espacio al público en general.*

Además, la Corte previno que el espacio público genera confianza, respeto y tranquilidad en la comunidad, porque contribuye a mejorar las condiciones de vida urbana y permite neutralizar, así sea en mínima parte, las agresiones propias de una gran ciudad o de los centros habitacionales modernos. La jurisprudencia es unívoca sobre la prioridad otorgada al deber de garantizar el espacio público por parte de las autoridades, a quienes corresponde impedir su menoscabo, respetando el debido proceso y el principio de confianza legítima de los ocupantes.

La importancia del espacio público como derecho colectivo ha sido explicada por este Tribunal en repetidas oportunidades, por considerarlo un ambiente propicio para el desarrollo físico y emocional de las personas y, por ello, un lugar en el cual se pueden llevar a cabo distintas formas de expresión humana, entre ellas, las artes líricas; además, muchas veces es diseñado por las autoridades para practicar deportes, caminar o contemplar su paisaje, siendo todas estas actividades necesarias para la sana interacción entre los integrantes de la comunidad, procurando al mismo tiempo mejorar su calidad de vida. La Corte ha destacado como aspectos esenciales y manifestaciones del espacio público los siguientes: a) Como deber del Estado de velar por la protección de la Integridad del Espacio público. b) Como deber del Estado de velar por su destinación al uso común. c) Por el carácter prevalente del uso común del Espacio Público sobre el interés particular. d) Por la facultad reguladora de las entidades públicas sobre la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común. e) Como Derecho e Interés Colectivo. f) Como objeto material de las acciones populares y como bien jurídicamente garantizable a través de ellas.

Como corolario del deber impuesto al Estado (C. Pol. art. 82) respecto de la protección a la integridad del espacio público, la Corte ha precisado que *es un deber de las autoridades públicas velar por el respeto y protección de la integridad del espacio público, el cual constituye un derecho colectivo que exige por sus características la actuación de las autoridades que con base en la regulación en las diferentes materias como el tránsito terrestre vele por la prevalencia del interés común sobre el particular, y que por su misma naturaleza de derecho constitucional exige su garantía por tratarse de un fin esencial del Estado. Es por tales motivos que la afectación del derecho al espacio público, y la regulación que lo protege puede conllevar a la imposición de ciertas medidas y sanciones.*

En este contexto, el Código Nacional de Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016) tiene como objetivo principal establecer las condiciones para la convivencia en el territorio nacional al propiciar el cumplimiento de los deberes y obligaciones de las personas naturales y jurídicas, así como determinar el ejercicio del poder, la función y la actividad de policía, de conformidad con la Constitución y el ordenamiento jurídico vigente. Con el fin de cumplir su objetivo, en su articulado, se establecieron una serie de deberes y obligaciones que deben ser observados por los ciudadanos, así como los comportamientos que afectan la sana convivencia e integridad urbanística y las consecuencias de dicho actuar. De esta manera el artículo 135 determina:

Art. 135. Los siguientes comportamientos, relacionados con bienes inmuebles de particulares, bienes fiscales, bienes de uso público y el espacio público, son contrarios a la convivencia pues afectan la integridad urbanística y por lo tanto no deben realizarse, según la modalidad señalada:

A) Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir:

1

3. En bienes de uso público y terrenos afectados al espacio público

Como viene de verse, la normativa que regula los comportamientos de los ciudadanos se encuentran claramente determinados, así como las consecuencias legales que acarrea la no observancia o incumplimiento de las mismas, indicando las autoridades competentes para conocer de tales infracciones, tal como lo estipula el artículo 206, que otorga dicha facultad a los Inspectores de Policía rurales, urbanos y corregidores, según corresponda.

#### RESPUESTA AL CASO CONCRETO

Ahora, conforme a lo atrás reseñado, ha de señalarse que el funcionario competente para tomar las medidas correctivas aplicables al caso en concreto, conforme lo estipula el artículo 206 y 216 de la Ley 1801 de 2016, tal como se indicó en la parte considerativa, es el Inspector de Policía, por lo tanto, mediante oficio SAIA No. 20848 del 07 de abril de 2021, se remitió la denuncia presentada con todos los anexos al funcionario con jurisdicción y competencia en el área objeto de petición, para que tome las medidas pertinentes.

Esperamos de esta manera haber dado respuesta a la denuncia radicada el 16 de diciembre de 2020 bajo los SAIA 4967 Y 5509, reiterando nuestra disposición de servirle dentro del ámbito de nuestra competencia

Atentamente,

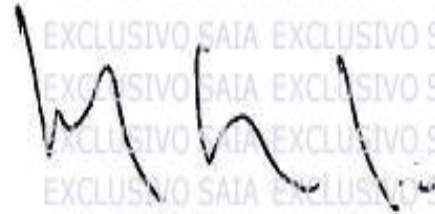


**ALVARO ARIAS VELEZ**

Secretario (a) de Gobierno

Reviso : JUAN FELIPE LONDOÑO RUIZ-Auxiliar Administrativo ✓

Reviso : EDUIN ALBERTO GUZMAN FRANCO-Contratista ✓



**WILFOR LOPEZ TORO**

Director (a) Operativo (a) de Control Físico

Proyectó y Elaboró: Gladis Esther Toro Aristizabal

Anexos: [Acta de Visita - Samaria Antigua Cancha de Tejo. Revisión \(1\) \(1\).pdf](#),  
[comunicacion\\_interna\\_20848\\_2021-04-07927256664.pdf](#)